

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el ciudadano Juez de Distrito de Tabasco por la Sra. Lucia Cano, vecina de Nacajuca, contra el ciudadano Gobernador del Estado, á consecuencia de haber destinado al servicio de las armas á su hijo Juan Ramon.*

### PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

El Fiscal dice: La Sra. Lucia Cano ha dado por fundamento para entablar el recurso de amparo en favor de su hijo Juan Ramon, el habersele destinado al servicio de las armas por falta de pago que le correspondia al segundo, en la guardia nacional, y por suponersele autor del delito de robo de una yegua de D. Mateo Hancobich, conuño del Gefe Político, y á la vez es cuñado del ciudadano Gobernador del Estado, ejecutor de la medida contra la que se pide amparo.

La falsedad de tales fundamentos se demuestra en el mismo escrito del día 30 de Noviembre que hace referencia del resultado de la gestion privada entablada por el ciudadano Nabor Hernandez, para obtener la libertad de Ramon, que en resumen abraza el informe rendido en el oficio del día 1º del actual.

Por consiguiente, el servicio al que hoy está sujeto el ciudadano Juan Ramon, no es infamante ni podrá dársele el carácter de pena, porque no lo es el servir á la República en la honrosísima carrera de las armas, que ella ha sabido ilustrar con hechos gloriosísimos; y por cuyas razones, el Fiscal se abstiene de considerar las reflexiones que la quejosa en tal respecto hace en los puntos 1º, 2º, 3º y 4º que son completamente inoficiosos.

Conmovida la República por las facciones que á mano armada pretendian derrocar al gobierno constitucional, y desgarrar el seno de la Patria, haciéndose árbitros de sus

destinos, hizo necesaria la suprema ley de 17 de Enero del corriente año, por la que, suspendiéndose algunas garantías individuales, se concedieron al Ejecutivo nacional las facultades bastantes para poder afrontar la situacion y salvar la República de la anarquía que la amenazaba, y cuya ley fué autorizada aún por la fracción parlamentaria opositora, que lucha en el terreno de la legalidad con la administracion actual; pero que no podia, en su patriotismo acrisolado, autorizar de modo alguno las agresiones por la fuerza material de la guerra civil.

En esa ley en que se tuvo cuidado de limitar al Ejecutivo federal, para que no fuesen alterados los principales elementos de la federacion constitutiva, con excepciones claras, terminantes, está la suspension expresa de las garantías que otorga al hombre la primera parte del artículo 5º de la Constitucion general de 1857, cuyo texto modifica el artículo 2º de la referida ley, en el sentido de que, "por causa de interes público, todo ciudadano puede ser compelido á prestar servicios personales mediante una justa retribucion," único medio, sin duda, para poder organizar el ejército permanente que se hacia indispensable para el objeto que la misma ley se habia propuesto.

Y esa facultad allí consignada, fué delegada con idénticos fines á los Gobernadores de los Estados, por circular suprema del Ministerio de la Guerra de 26 de Enero de este año, que el Gobernador ha acompañado en copia, y cuya autenticidad consta al actual Fiscal.

El ciudadano Juan Ramon, por consiguiente, ha sido destinado al servicio de las armas por un tiempo necesario, de un modo legítimo y por causa igualmente legítima. La salud de la Patria antes que todo y sobre todo; porque sin Patria, no puede haber derechos, garantías, paz y bienestar. *Præus est esse, quam taliter esse.*

En este lugar podría traerse la razon, de que la ley de suspension de garantías ha cesado de regir, y deberian de cesar tambien los efectos que ella ha producido en

contra de las garantías individuales; pero esta es cuestion que no está en la mano de la justicia el resolver, por carecer de facultades legislativas. La ley ha querido el robustecer al poder Ejecutivo con la suma de facultades necesarias para organizar el ejército, arrollar á los rebeldes y hacer permanente la paz; sin duda porque constitucionalmente no podrian alcanzarse tales ventajas, ni los medios de que podria disponer la administracion serian suficientes.

La ley ha cuidado de exigir al gobierno nacional, el que dé cuenta ante el Congreso del uso que hiciera de sus facultades; pero no expresa, que al cesar ellas, lo hecho por el gobierno deberia tenerse como hecho, porque esto valdria tanto como el desorden en la administracion.

No solo Juan Ramon se encuentra en esa situacion, sino que millares de ciudadanos han sido destinados á los cuerpos, que por el rigor de la disciplina y necesidad de su organizacion tenian que serlo por el término habitual en el ejército, y la declaracion indicada dejaria desiertas las filas de nuestros batallones, y tal vez la rebelion vendria á la voz á levantarse fuerte y poderosa.

Por último; concedido que fuera el amparo, ¿cómo podria el Ejecutivo del Estado hacerlo cumplir? Consignado Ramon á un cuerpo, ha sido pasado por caja, y alistado con todas las formalidades legales, á la jurisdiccion militar, que en lo económico está puramente sujeto al jefe de cada batallón, y en lo principal, al Ministerio de la Guerra, sin intervencion la mas pequeña del gobierno del Estado, ni autoridad alguna diversa de la República. El amparo vendria á colocar al ciudadano Gobernador del Estado en una situacion difícil entre el deber de deshacer lo hecho y la imposibilidad de verificarlo.

Estos méritos, obligan al Fiscal á solicitar que el amparo se declare sin lugar en el presente caso; que por su naturaleza solamente permitiria el dirigir á la Suprema Corte de Justicia el informe necesario para

que si estimase procedente la duda que puede nacer de si deben ó no deben sostenerse los efectos de la ley de suspension de garantías, hoy que rigen plenamente las leyes constitucionales, la diriga al Congreso general, para que dicte la aclaratoria que corresponda.

San Juan Bautista, Diciembre diez de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—Lic. P. Rosado.

### *Sentencia del Juez de Distrito.*

San Juan Bautista, Enero seis de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos estos autos creados á virtud del ocurso fecha 30 de Noviembre último, en que Lucia Cano, á nombre de su hijo Juan Ramon, solicita amparo contra la providencia del Ejecutivo del Estado que consignó á este al servicio de las armas en esta plaza en calidad de reemplazo del ejército: el informe del ciudadano Gobernador, segun el cual la providencia reclamada tuvo efecto á virtud de la ley de 17 de Enero del año próximo pasado que concedió al Supremo gobierno nacional facultades extraordinarias, y por delegacion que este hizo de las mismas á los Estados, en circular de 26 del mismo mes, con respecto al reclutamiento de reemplazos: visto lo razonado por las partes actora y fiscal, como igualmente las probanzas producidas, el Tribunal, pasando á formular su fallo definitivo, considera:

1º Que aunque en el escrito de demanda no se especifica la garantía violada, se comprende por los términos de su relato, y por todo lo ulteriormente razonado, que la que se considera vulnerada es la que el Código fundamental de la Nacion consigna en su artículo 5º, estableciendo que nadie puede ser obligado á prestar trabajos personales sin la justa retribucion, y sin su pleno consentimiento.

2º Que por consiguiente, el exámen judicial debe limitarse á la cuestion de si en la

providencia reclamada ha habido ó no violacion de la expresada garantía.

3º Que es un hecho constante de autos, que en la fecha 4 de Marzo último tuvo lugar la providencia reclamada; época en que estaba en pleno vigor la ley citada de 17 de Enero de 1870, cuyo artículo 2º suspende la expresada garantía, declarando: que en caso de interes público, todo individuo puede ser obligado á prestar trabajos personales con la justa retribucion.

4º Que por la citada circular de 26 de Enero, el Supremo gobierno nacional delegó á los gobernadores de los Estados la facultad que por este artículo se le concede, para el efecto de proporcionar reemplazos al ejército del modo que considerase mas eficaz.

5º Que supuesto, segun estos precedentes, que la garantía de la 1ª parte del artículo 5º constitucional no subsistia á la fecha en que Juan Ramon fué consignado al servicio de las armas, es claro que la providencia gubernativa que así lo dispuso, no importa la violacion de aquella, aun admitido que tal acto se hubiese consumado sin su pleno consentimiento, circunstancia que no se ha comprobado en el curso de esta causa.

6º Que la cuestion de si el ciudadano Gobernador, en el caso de Juan Ramon, usó bien ó mal de la facultad delegada por el Supremo gobierno, no es de la competencia de este Juzgado, siendo materia de un juicio distinto del de amparo y sometido á diferente autoridad.

7º Que tampoco entra en las facultades del Tribunal decidir si el acto que ha dado origen á este juicio, consumado bajo el imperio de la ley transitoria de suspension de garantías, será ó no subsistente hoy que ha espirado el vigor de aquella.

Por consiguiente, este Juzgado, atendiendo solo á los considerandos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, y de conformidad con el artículo 13 de la ley de 20 de Enero de 1869, falla definitivamente, declarando:

1º La justicia federal no ampara ni protege al ciudadano Juan Ramon contra la

providencia gubernativa que lo destinó al servicio de las armas en 4 de Marzo último.

2º Vista la notoria insolvencia de la parte promovente, no se le hace aplicacion del artículo 16 de la propia ley.

3º Cúmplase lo dispuesto al final del citado artículo 13.

Lo proveyó el ciudadano Lic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado, por ante mí su escribano que doy fé.—(Firmados.)  
—Limbano Correa.—Gabriel Sosa.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte.*

México Febrero siete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco, por Dª Lucia Cano, á nombre de su hijo Juan Ramon contra el C. Gobernador del Estado por haber dispuesto que Juan Ramon fuera consignado por cinco años al servicio de las armas en las compañías fijas de esa plaza; y considerando: que aunque en el expediente se dice, que Juan Ramon fué consignado á ese servicio en virtud de las facultades extraordinarias concedidas al Gobierno general por el decreto de 17 de Enero del año próximo pasado, y la delegacion que de ellas hizo al C. Gobernador del Estado para cubrir los reemplazos del ejército; de las pruebas aparece, que por otros motivos diversos de las facultades extraordinarias, se consignó al quejoso al servicio de las armas, no usando, desde que fué consignado, de la facultad que se concedió en el decreto al Gobierno; y que esa consignacion y la detencion del quejoso en el servicio militar despues de haber cesado las facultades de que estuvo investido el Ejecutivo, violan la garantía á que se refiere el artículo 5º de la Constitucion federal; por lo expuesto, y en virtud de lo que previene el artículo 101 de la misma, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada el 6 de Enero próximo pasado por el Juez de Distrito de Ta-

basco que negó el amparo á Juan Ramon: y se declara, que la Justicia de la Union lo ampara y protege contra el acto del C. Gobernador del Estado por el cual se le consignó por cinco años, el 4 de Marzo del año próximo pasado, al servicio de las compañías fijas de la plaza de Tabasco.

Devuélvase sus actuaciones al Juez de Distrito mencionado, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. — (Firmados.) — *S. Lerdo de Tejada.* — *P. Ogazon.* — *Juan J. de la Garza.* — *J. M. Lafragua.* — *P. Ordaz.* — *Ignacio Ramirez.* — *J. M. del Castillo Velasco.* — *M. Auza.* — *S. Guzman.* — *M. Zavala.* — *J. G. Ramirez.* — *L. Guzman.* — *Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero diez y seis de mil ochocientos setenta y uno. — *Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido por el ciudadano Antonio Rodriguez contra el C. Gobernador del Estado de Puebla, por haber sido destinado al servicio de las armas en el primer Batallon de Cazadores Guardia Nacional.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, cree muy conveniente, que recursos de la competencia del presente no deban admitirse sin direccion de letrado, pues no es fácil que el vulgo tenga conocimiento de las leyes, é importaria la mas grave injusticia la disposicion del ar-

tículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, tratándose de un recurso improduyente, admitido sin aquel requisito.

Pero ya que el Juzgado por equidad ha dado entrada al juicio, nada mas sencillo que fundarlo en la ley, pues patente y clara es la violacion de una garantía individual en el caso, por mas que en el ocurso no se haya determinado con la precision debida.

El ciudadano Antonio Rodriguez, jamas dió su consentimiento para prestar sus servicios en la carrera de las armas, y si en virtud de una ley anticonstitucional y extraordinaria pudo imponérsele tan dura obligacion, quedó libre de los efectos de esa ley desde el momento en que la autoridad le concedió su licencia absoluta.

Libre ya como estaba, su retencion en el cuartel no pudo tener mas carácter que el de pena, ó es una violacion de la garantía que otorga el artículo 59 constitucional; pero la pena debe ser el resultado de un juicio, y sobre que aquí no lo ha habido, el servicio de las armas no puede imponerse con ese carácter, ni está comprendido como tal entre las diversas que nuestras leyes penales enumeran.

Es pues, simplemente una arbitrariedad que se comete so pretexto de una deuda civil, si es que tal deuda existe. Si Rodriguez extravió el fusil y vestuario, el derecho da accion contra él para recobrar el valor de los efectos, ó puede exigírsele la devolucion y paga como condicion previa á su libertad; y se podrá usar de otros medios que no sea el bárbaro de la prision por deudas, (cosa que con razon prohíbe el artículo 17 de la Constitucion, y constituye una garantía individual de las mas respetables.) Podria añadirse sin temor de errar, que tal deuda no existe, no solo por lo que expone la esposa del agraviado, sino porque las cantidades que se adeudan á éste por sueldos, han de superar con mucho exceso á la pequeña suma de que se lo pretende hacer responsable; pero aun cuando así no fuera, y aun cuando hubiera extraviado tres